

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE : ELKIN RENE ESTRADA CASTRILLÓN
DEMANDADO : COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO : ORDINARIO
RADICADO NACIONAL: 05-001-31-05-012-2020-00236-01
RADICADO INTERNO : 244-23
DECISIÓN : CONFIRMA SENTENCIA
ACTA NÚMERO : 272

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación y el grado jurisdiccional de consulta, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicita se DECLARE que tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes desde la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral.

Se CONDENE a Colpensiones a reconocer y pagar la pensión de invalidez de origen común, en forma retroactiva, desde el 17 de diciembre de 2016 hasta el 1º de octubre de 2019, día anterior de inclusión en nómina de pensionados; al pago de los intereses moratorios o en subsidio la indexación; y las costas procesales.

Fundamentó sus pretensiones en que, el actor fue cotizante al ISS hoy Colpensiones desde el 31 de marzo de 1989; mediante dictamen N° 2018284771QR del 23 de agosto de 2018 emitido por Salud Ocupacional de

Colpensiones, se calificó con una pérdida de capacidad laboral del 81.29%, de origen común y con fecha de estructuración 17 de diciembre de 2016; el demandante acredita los requisitos mínimos para acceder a su pensión de invalidez, conforme al artículo 1° de la Ley 860 de 2003 porque entre el 17 de diciembre de 2013 al 17 de diciembre de 2016 cuenta con más de 50 semanas de cotización.

El accionante solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez el 4 de octubre de 2018, la cual fue reconocida a través de la resolución SUB 326610 del 19 de diciembre de 2018; pero fue dejada en suspenso, hasta que se allegara sentencia de nombramiento de curador provisorio y/o definitivo y el acta de posesión, actuación que contraría las sentencias de la Corte Constitucional, entre ellas la sentencia T 185 de 2018, que manifiesta que no es posible dejar en suspenso una pensión de vejez para el nombramiento de curador; como curadora del demandante fue nombrada la señora BERTHA OLIVIA ESTRADA CASTRILLÓN, quien actuando en dicha calidad, solicitó el levantamiento de la suspensión de la pensión de invalidez y a través de resolución SUB 256042 del 18 septiembre de 2019, Colpensiones ordenó la inclusión en nómina de pensionados a partir del 1° de octubre de 2019, reconociendo una mesada pensional por valor de \$828.116 sin reconocer el retroactivo pensional; Colpensiones aduciendo que no reconoce el retroactivo pensional porque con la reclamación administrativa no se había presentado el certificado del último pago de incapacidad laboral, por lo tanto, el reconocimiento se hace a corte de nómina; inconforme con la decisión, el 17 de marzo de 2020 se solicitó el reconocimiento y pago del retroactivo de la pensión de invalidez, generado desde la fecha de estructuración, solicitud que fue resuelta desfavorablemente en resolución SUB 84624 del 31 de marzo de 2020, aduciendo que el certificado emitido por la EPS COOMEVA que se adjuntó con la solicitud del 04 de octubre de 2018, se encuentra borrosa y no cumple con las exigencias de la entidad, dado que no se evidencia con precisión las fechas de pago, funcionario competente y determinado, ni la firma del mismo.

RESPUESTA A LA DEMANDA

La accionada Colpensiones en su contestación dijo que es cierto que el Sr. Elkin Rene Estrada Castrillón es cotizante al ISS desde el 31 de marzo de 1989; la calificación de pérdida de la capacidad laboral emitido por Colpensiones; que el demandante cuenta con más de 50 semanas en los años 2013 a 2016; la solicitud de la pensión de invalidez, la cual fue reconocida y

dejada en suspenso; la solicitud elevada por la curadora para levantar la suspensión de la pensión en mención. No le consta el agotamiento del trámite administrativo. No son ciertos los demás hechos de la demanda. Se opuso a las pretensiones de la demanda. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación de pagar retroactivo, inexistencia de la obligación de reconocer y pagar intereses moratorios, inexistencia de la obligación de pagar indexación, prescripción, compensación, buena fe, la genérica, imposibilidad de condena en costas, innominada (expediente digital 05).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 18 de julio de 2023, el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ que al Sr. ELKIN RENÉ ESTRADA CASTRILLÓN le asiste el derecho al disfrute de su pensión de invalidez, a partir del 10 de junio de 2017.

CONDENÓ a Colpensiones a reconocer y pagar a favor del demandante la suma de \$22.994.524, por concepto de retroactivo de la pensión de invalidez, generado entre el 10 de junio de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2019; a reconocer y pagar a favor del actor, sobre la suma reconocida por concepto de retroactivo pensional, los correspondientes intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, desde el 05 de febrero de 2019. Condenó en costas a cargo de Colpensiones.

IMPUGNACIÓN

La apoderada de Colpensiones apela el reconocimiento de los intereses moratorios por considerar que estos se causan a partir del sexto mes siguiente de la solicitud del reconocimiento pensional según lo establece la sentencia T 588803 (sic), C 1024 de 2004 y SV 065-18.

Y en las sentencias SL 4338 de 2019, T 586 de 2012 y C 601 de 2000, han señalado que no hay lugar a intereses moratorios cuando se solicita reliquidación pensional, y asegura la apelante que no hay regla que permita interpretar que los intereses moratorios se reconocen en eventos de reajuste pensional.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La apoderada de Colpensiones sostiene que conforme el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, art. 10 del Decreto 758 de 1990, artículo 3o. del Decreto 917 de 1999 y el Concepto 2006026318-001 del 10 de julio de 2006 de la Superintendencia Financiera, se establece que la forma de verificar la inexistencia de pagos simultáneos de incapacidades y mesadas pensionales de invalidez es a través de la emisión de certificado por parte de la EPS competente que cumpla una serie de requisitos; solo fue en este momento, que COOMEVA respondió el oficio 307 e informó que la última incapacidad del accionante fue de 30 días, ello es, desde el 20 de agosto de 2018 hasta el 18 de agosto de 2018, lo que conlleva que el reconocimiento de los intereses de mora, solo se causarían a partir del 06 mes siguiente, argumento que sustenta con las sentencias T 588 de 2003, C 1024 de 2004, SU 065 de 2018, SL 4338 de 2019, T 586 de 2012 y C 601 de 2000.

PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO

El problema jurídico se centra en determinar en virtud del recurso de apelación, si hay lugar a revocar los intereses moratorios.

Y en el grado jurisdiccional de consulta se analizará: i) Si el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez desde el 10 de junio de 2017; ii) Si tiene derecho al reconocimiento del retroactivo pensional en la suma establecida en primera instancia, generada entre el 10 de junio de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2019; iii) A la condena en costas.

1. De la pensión de invalidez y su retroactivo

En primera instancia, se declaró que el actor tenía derecho a disfrutar la pensión de invalidez desde el 10 de junio de 2017 y condenó al pago del retroactivo pensional generado entre el 10 de junio de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2019, aduciendo que conforme lo establece el art 40 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 758 de 1990, la pensión de invalidez se reconoce a solicitud de la parte interesada y su pago se realiza desde la fecha que se produzca o estructure tal estado y que la norma indica que cuando el afiliado perciba incapacidad laboral, la pensión se cubre al expirar el derecho al subsidio.

Adujo el A Quo, que en este caso el demandante tiene una pérdida de la capacidad laboral del 81.29% y la fecha de estructuración del 17 de diciembre de 2016 según el dictamen de Colpensiones; la entidad en resolución de 2018

le reconoció la pensión de invalidez con fecha de estatus pensional el 17 de diciembre de 2016 y dejó en suspenso hasta que se acreditara la representación por curador; la curadora tomó posesión el 20 de agosto de 2019; y en resolución del año 2019 Colpensiones levantó el suspenso y ordenó el pago de la pensión de invalidez a partir del 1º de octubre de 2019; y en certificación emitida por COOMEVA EPS consta que se otorgaron subsidios de incapacidad al demandante desde el 14 de diciembre de 2016 y tuvo prorrogas hasta el 19 de septiembre de 2018 pero de ellas solo se pagaron las incapacidades hasta el 9 de junio de 2017 y a partir de esa fecha existe anotación de “no se evidencia pago”. Concluyó que, al haber disfrutado el demandante de subsidios de incapacidad y acorde con la norma y la jurisprudencia, la prestación de invalidez solo se puede disfrutar desde el día siguiente a la última incapacidad, que en este caso es a partir del 10 de junio de 2017.

Se encuentra acreditado en el plenario y no es objeto de discusión que el demandante fue calificado por Colpensiones y en dictamen se determinó una pérdida de la capacidad laboral del 81.29% de origen común, estructurada el 17 de diciembre de 2016 (fl. 132 a 136 del expediente digital 05); que el demandante solicitó pensión de invalidez el 4 de octubre de 2018 y por medio de resolución 326.610 de 2018 le fue reconocida la prestación económica y como el Sr. ELKIN RENE ESTRADA CASTRILLÓN requería de terceras personas para tomar decisiones, la pensión se dejó en suspenso hasta que se presentara sentencia de nombramiento de curador (fls. 76 a 83 del expediente digital 05); en sentencia del Juzgado Civil del Circuito de Caldas, emitida el 26 de julio de 2019, se declaró la interdicción judicial definitiva por discapacidad mental absoluta al Sr. ELKIN RENE ESTRADA CASTRILLÓN y se designó como curadora a la Sra. Berta Oliva Estrada Castrillón como curadora legítima (fls. 16 a 17 del expediente digital 03); la Sra. Berta Oliva Estrada Castrillón se posesionó como curadora el 20 de agosto de 2019 (fl. 15); la Sra. Berta Oliva Estrada Castrillón solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez el 30 de agosto de 2019 y en resolución 256.042 de 2019 se levantó el suspenso de la pensión y se ordenó el pago desde el 1º de octubre de 2019 (fls. 98 a 106 del expediente digital 05).

En este sentido, el art. 40 de la Ley 100 de 1993 relativo al monto de la pensión, reza en su último párrafo: *“La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado”*.

El art. 10 del Decreto 758 de 1990 en concordancia con el art. 31 de la Ley 100 de 1993 aclara aún más el tema al señalar frente al disfrute de esta prestación económica al señalar *“la pensión de invalidez por riesgo común se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse forma periódica y mensual desde la fecha en que se estructure tal estado. Cuando del beneficiario estuvieron en goce del subsidio por incapacidad temporal, el pago de la pensión invalidez comenzará a cubrirse al expirar el derecho al mencionado subsidio”* y el art. 3º del Decreto 917 de 1999 por medio del cual se define la fecha de estructuración o declaración de la pérdida de capacidad laboral establece que *“... En todo caso mientras dicha persona reciba subsidio por incapacidad temporal no habrá lugar a recibir las prestaciones derivadas de la invalidez”*.

En primera instancia se reconoció la prestación económica en forma retroactiva a partir **del 10 de junio de 2017**, fecha siguiente a la última incapacidad cancelada al actor.

Visto lo anterior, al analizar la prueba aportada en su conjunto, para la Sala es claro que el demandante fue calificado por Colpensiones con una pérdida de la capacidad laboral del 81.29% estructurada el **17 de diciembre de 2016**, no obstante, a en el expediente digital 21, se allegó certificado de incapacidades de la EPS COOMEVA, en el que se refleja los siguientes pagos:

- Por el periodo del 14 al 18 de diciembre de 2016
- Del 19 de diciembre al 16 de enero de 2017
- Del 25 de febrero de 2017 al **9 de junio de 2017** en forma interrumpida

Y de dicha certificación se evidencia que los periodos de incapacidades del 10 de junio de 2017 al 18 de septiembre de 2018 no fueron pagados, al quedar reportado “NO SE EVIDENCIA PAGO”

Si bien, en principio, la Corte Suprema de Justicia adoptaba la posición donde disfrute de la prestación económica de invalidez se generaba desde la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral, y en los eventos donde existía pagos de incapacidades posteriores a la fecha de estructuración, había lugar a ser descontados, pues así se indicó en la sentencia SL 1562 de 2019 cuando señaló:

“Así que, pese a la condición de trabajador dependiente del actor y la existencia de aportes al Sistema General de Pensiones con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez, esta Sala ha

indicado con anterioridad (ver sentencia SL619-2013), que ello no desvirtúa el reconocimiento retroactivo del derecho pensional desde que se estructuró el estado de invalidez. En esos términos, no se equivocó el ad quem al señalar que la concurrencia de estas específicas circunstancias (continuidad en la prestación del servicio y cotización al Sistema General de Pensiones), no desvirtúan lo establecido en el artículo 40 de la Ley 100 de 1993, es decir, que el reconocimiento de la pensión de invalidez se haga desde la estructuración.

Ahora bien, en lo que atañe a la incompatibilidad entre el pago de mesadas pensionales y subsidios por incapacidad temporal, el artículo 3 del Decreto 917 de 1999, establece que: (...)

De cara a lo establecido en el citado precepto, estima la Sala que el juez de apelaciones tampoco lo desconoció ni le dio un entendimiento erróneo, pues, por el contrario, al descontar del pago del retroactivo pensional los periodos de subsidios por incapacidad temporal, procuró armonizar lo establecido en el decreto enunciado con las restantes disposiciones de la Ley 100 de 1993, que ordenan el reconocimiento de la prestación desde el momento de estructuración de la invalidez y salvaguardar el propósito indiscutible de auxilio.

*Al respecto, se insiste en que el citado artículo 40 de la Ley 100 de 1993 **es claro en indicar que la pensión de invalidez por riesgo común debe otorgarse, de manera retroactiva, a partir de la fecha en que se produce el estado de invalidez**, es decir, desde cuando la pérdida de la capacidad laboral alcanza un porcentaje igual o superior al 50% (artículo 39 de la Ley 100 de 1993). De lo que se deriva que el legislador en el citado precepto no estableció ni explícita ni tácitamente, condición alguna, diferente al estado de invalidez, para proceder al reconocimiento del derecho pensional desde la fecha de estructuración. (...)*

*De modo que, como bien lo dedujo el Tribunal, de cara a la incompatibilidad establecida en el artículo 3 del Decreto 917 de 1999, **cuando, como en el presente asunto, el retroactivo pensional cubija periodos que también han sido cubiertos por subsidios por incapacidades temporales, la prohibición de que trata el citado decreto, a lo sumo, conduciría a la imposibilidad de que se disfruten o perciban, a la vez, la mesada pensional y el subsidio por la incapacidad, pero no a la imposibilidad del reconocimiento del derecho pensional.***” (Resalto de la Sala)

Esa posición fue rectificada en sentencia reciente SL 5170 de 2021, por medio de la cual el Alto Tribunal determinó la posibilidad de pagar las mesadas pensionales desde la fecha de estructuración de la invalidez, en los eventos en que no se hayan reconocido subsidios por incapacidad, pues de ser así, el pago de la prestación se realiza a partir de la última incapacidad. Al respecto dijo:

“Así las cosas, frente al tema del reconocimiento de la pensión de invalidez estima la Sala que el Tribunal no incurrió en ningún yerro en la intelección que asignó a los preceptos normativos enunciados cuando existen subsidios por incapacidad temporal con posterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez, al entender que las

mesadas se comienzan a pagar, de forma retroactiva, desde la data de la estructuración, **pero siempre que con posterioridad a ella no se hubieren reconocido subsidios por incapacidad, continuos o discontinuos, evento en el cual se pagará, pero a partir del momento en que expire el derecho a la última incapacidad.**

(...)

Es claro entonces que, mientras el afiliado se encuentre recibiendo el subsidio por incapacidad temporal no puede percibir prestaciones derivadas de la invalidez, como son las mesadas pensionales, **cuyo pago procede una vez la entidad previsional reconozca la pensión, momento a partir del cual ya no procede el pago de las incapacidades,** porque la acción protectora es asumida por otra prestación, dado el nuevo hecho que la causa – la invalidez-, siendo la razón por la cual el sistema de salud no contempla prestaciones económicas para los pensionados --Artículos 28 del Decreto 806 de 1998 y 2.1.3.6 del Decreto 780 de 2016--.

(...)

Teniendo en cuenta todo lo expuesto en líneas precedentes, la Sala considera necesario precisar su doctrina, en el sentido de señalar que **cuando existen subsidios por incapacidad temporal, continuos o discontinuos, con posterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez, las mesadas pensionales se comenzarán a pagar sólo a partir del momento en que expire el derecho a la última incapacidad,** postura con la cual queda rectificada y delineada su posición con relación a criterios anteriores que le hubieren sido contrarios (SL1562-2019). ”

En consideración a lo anterior, considera la Sala que el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago del retroactivo pensional causado desde el **10 de junio de 2017** como se indicó en la sentencia de primera instancia, **pues se repite el ultimo pago de la incapacidad tuvo lugar el 9 de junio de 2017,** y no se puede reconocer la pensión de invalidez desde la fecha de estructuración, que es 17 de diciembre de 2016, al no ser compatible el pago de incapacidades médicas con el reconocimiento de la pensión de invalidez solicitada.

Revisado el retroactivo pensional reconocido en primera instancia del 10 de junio de 2017 al 30 de septiembre de 2019 (día anterior a la inclusión en nómina de pensionado) a la Sala le da idéntico valor reconocido en primera instancia.

| REAJUSTE PENSIONAL | | | | | | |
|--------------------|-------|------------------|------------|--------------------|-----------|-------------------|
| Año | IPC | Valor reconocido | Valor real | Diferencia mensual | # mesadas | Total retroactivo |
| 2017 | 4,09% | \$ - | \$ 737.717 | \$ 737.717 | 7,3 | \$ 5.385.334 |
| 2018 | 3,18% | \$ - | \$ 781.242 | \$ 781.242 | 13 | \$ 10.156.146 |
| 2019 | 3,80% | \$ - | \$ 828.116 | \$ 828.116 | 9 | \$ 7.453.044 |
| | | | | | TOTAL | \$ 22.994.524 |

Con fundamento en lo anterior, se CONFIRMARÁ el reconocimiento del disfrute de la pensión y el retroactivo pensional determinado en la sentencia de primera instancia.

2. De los intereses moratorios

En primera instancia se reconoció por haber sido presentada la reclamación administrativa el 4 de octubre de 2018 y para esa fecha se encontraban consolidados los requisitos de la pensión y la entidad contaba con el certificado de incapacidades sin que hubiera reconocido el retroactivo pensional.

Decisión que será CONFIRMADA bajo el entendido que en resolución 326610 de 2018 reposa que el Sr. ELKIN RENE ESTRADA CASTRILLÓN elevó la reclamación el 4 de octubre de 2018, la prestación se reconoció en la resolución en mención que fue emitida el 19 de diciembre de 2018, ello es, 2 meses después de elevada la solicitud; si bien, se dejó en suspenso la prestación hasta que se acreditara la existencia de curador que representara los intereses del demandante, la prestación se debió ser reconocida desde el 10 de junio de 2017, en vista que en el expediente administrativo que reposa en el plenario, se encuentra el certificado de incapacidades, de donde se desprende el pago de ellas hasta el mes de “2017-06-09” (fl. 87 del expediente digital 05). Por lo tanto, la accionada contaba con los elementos probatorios para reconocer el retroactivo pensional y esta solo sujeta a acreditarse la representación del demandante por medio de curador, lo que no obsta para el reconocimiento del retroactivo pensional a la luz de la sentencia SL 1020 de 2021 donde se indicó que los menores, los dementes, los sordomudos que cuentan con representación legal, la suspensión de la prescripción opera sin tener en consideración dicha representación conforme fue indicado en sentencia 11.349 de 1998 reiterada en sentencia SL 10.641 de 2014. Al respecto señaló lo siguiente:

“... La sentencia CSJ SL, del 11 dic. 1998, rad 11349, reiterada en la CSJ SL10641-2014, aun cuando se refería a la suspensión de la prescripción frente a los menores de edad precisó que esta cobijaba a las personas contempladas en el artículo del compendio civil en comento y, en esa dirección, señaló:

(...)

*“... En el derecho común, aplicable por remisión a los créditos laborales, el **artículo 2541 del Código Civil contempla la suspensión de la prescripción extintiva de las obligaciones y remite al artículo 2530 ibidem** para identificar las personas en cuyo favor opera tal figura, dentro de las cuales el artículo 68 del decreto 2820 de 1974, que modificó parcialmente aquella*

*disposición, incluye a "Los menores, **los dementes**, los sordomudos y quienes estén bajo patria potestad, tutela o curaduría".*

*Si la norma transcrita extiende el beneficio de la suspensión de la prescripción a los menores, los dementes y los sordomudos, **y expresamente se refiere a quienes cuentan con representación legal (patria potestad y guarda)**, es claro que la suspensión opera sin consideración a que exista o no tal representación, por lo que debe entenderse que el modificado artículo 2530 del CC contiene un beneficio para determinadas personas a quienes la ley protege **sin importar que el sujeto cuente o no con un representante legal eficiente o ineficiente, por lo que el error en que aquel incurra, no puede afectar la situación jurídica del representado.** (...)"*

Adicionalmente, no le asiste razón a la apoderada de Colpensiones al pretender la absolución aduciendo que el reconocimiento se da a partir del sexto mes de la reclamación, bajo el entendido que el art. 9 de la Ley 797 de 2003 y en sentencia SL 2991 de 2020 se reitera el plazo de 4 meses a partir de la reclamación al señalar *"Por lo indicado, se condenará a Colpensiones a pagar en favor de la promotora del litigio los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 26 de marzo de 2015, esto es, 4 meses después de la data en la que interpuso el recurso de reposición contra el acto administrativo que negó el reconocimiento del derecho pensional hasta el momento en que se produzca el correspondiente reconocimiento del retroactivo pensional, tal como lo determinó esta Sala, entre otras, en sentencia CSJ SL14269-2014."*, y en este sentido, la reclamación tuvo lugar el 4 de octubre de 2018 y a fecha no ha reconocido el retroactivo pensional, debiendo reconocer los intereses moratorios desde el 5 de febrero de 2019 conforme se indicó en la sentencia.

3. De las costas procesales en primera instancia

Se CONFIRMARÁN, dando aplicación al art. 365 del CGP que expresa: "1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso...", y en este evento, las pretensiones del reconocimiento del retroactivo pensional e intereses moratorios fueron reconocidas a la parte accionante.

Costas en esta instancia, en la suma de \$580.000 a cargo de Colpensiones y a favor del demandante, por haber prosperado parcialmente el recurso de apelación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, por lo expresado en la parte motiva de esta providencia.

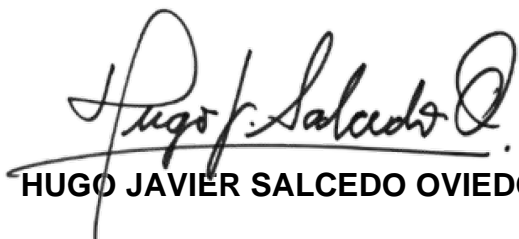
SEGUNDO: Costas en esta instancia, en la suma de \$580.000 a cargo de Colpensiones y a favor del demandante, por haber prosperado parcialmente el recurso de apelación.

TERCERO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



HUGO JAVIER SALCEDO OVIEDO



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



SECRETARÍA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE : ELKIN RENE ESTRADA CASTRILLÓN
DEMANDADO : COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO : ORDINARIO
RADICADO NACIONAL: 05-001-31-05-012-2020-00236-01
RADICADO INTERNO : 244-23
DECISIÓN : CONFIRMA SENTENCIA

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 03 de octubre de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 03 de octubre de 2023 a la 5:00pm

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO